



Observatorio de Políticas Públicas



Coordinación General del Cuerpo de
ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL

CAT. OPP/CAG/2005-20

DELITO Y SISTEMA PENITENCIARIO
SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
ALTERNATIVAS AL USO DE LA PRISIÓN
CONTOL INSTITUCIONAL Y SOCIAL
DERECHOS HUMANOS DE LOS INTERNOS
CONDICIONES DE VIDA EN LA CÁRCEL
TRATAMIENTO PENITENCIARIO

DICIEMBRE DE 2005

Autores:

AG Gustavo Reija
AG Claudia Garcia Diamanti
AG Claudia Grioni
AG Elisa Maceira
AG Enrique Arguiñariz
AG Juan Debarnot
AG Oscar Valsecchi
AG Raquel Groshaus
AG Víctor Morales

Este documento fue producido por los responsables del Area Temática “Sistema Penitenciario Federal” del Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el mes de diciembre del año 2005.

El Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales inició sus actividades en el año 2002 en jurisdicción de la Coordinación General del C.A.G., sus documentos son publicados en el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Sitio Oficial: www.cag.jgm.gov.ar

AG V. Daniel Piemonte
Coordinador General
Cuerpo de Administradores Gubernamentales

AG Guillermo J. Alabés
Coordinador Ejecutivo
Observatorio de Políticas Públicas

Indice

	Página
Introducción	3
Capítulo I: Delito y Sistema Penitenciario	6
Capítulo II: Sistema Penitenciario Federal	10
Capítulo III: Administración Penitenciaria	16
Capítulo IV: Alternativas al uso de la Prisión	24
Capítulo V: Control Institucional y Social	26
Capítulo VI: Derechos Humanos de los Internos	32
Capítulo VII: Condiciones de Vida en la Cárcel	41
Capítulo VIII: Tratamiento Penitenciario	46
Anexo I: Normas, Convenios Internacionales y Recomendaciones relevantes	61
Anexo II: El Sistema Penitenciario Federal en Números	63

“Suele decirse que nadie conoce realmente como es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de más alto rango, sino por la manera en la que trata a los de más bajo”

Nelson Mandela

“El largo camino hacia la libertad”,
Barcelona, Círculo de lectores, 1995

Introducción

El presente documento de trabajo tiene como objetivo central presentar una versión, preliminar y sintética, de los principales problemas asociados a la gestión de políticas públicas en materia de administración penitenciaria.

Los temas incluidos pretenden mostrar la complejidad de la gestión de prisiones, y la necesidad de un enfoque multidisciplinario para su correcto abordaje.

Se ha optado por seleccionar aquellos temas que presentan un conjunto de factores comunes que, en su integración, representan un modelo para una buena gestión penitenciaria.

Se ha hecho especial hincapié en el análisis de la normativa internacional en la materia, plasmada en convenios y documentos internacionales, como forma de brindar un enfoque introductorio del estado de esta rama de la política pública en materia internacional.

Estas normas han sido aceptadas por la comunidad internacional, y aprobadas por la mayoría de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas.

Nuestro país, como parte del concierto de naciones, ha incorporado principios y recomendaciones internacionales, las que han sido recogidas en la Ley N° 24.660, de Ejecución de la Pena Privativa de la

Libertad, que regula el funcionamiento del Sistema Penitenciario Federal.

Asimismo, existen una serie de documentos internacionales de los cuales la Argentina ha incorporado sus principios y metodologías en relación al tratamiento de los internos penitenciarios tales como: las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos (1957); el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988); los Principios Básicos para el tratamiento de los reclusos (1990).

Con relación al personal que trata con los reclusos, existen también documentos y convenios internacionales, entre los que cabe destacar el Código de Conducta para los funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979).

El presente documento de trabajo se ha estructurado en ocho capítulos y dos anexos.

Los ocho capítulos abordan temas centrales de la política penitenciaria tales como: relación entre delito y sistema penitenciario; un breve diagnóstico del Servicio Penitenciario Federal como órgano de administración de la pena privativa de la libertad, estableciendo una agenda a ser incorporada en un futuro programa de reforma; aspectos de administración penitenciaria en materia de gestión carcelaria; un enfoque del tratamiento del interno como camino hacia su rehabilitación social y aspectos relativos al control social y externo de la "institución penitenciaria" por parte de la sociedad que le otorga el mandato de mantener en custodia y rehabilitar a los que se han apartado de la Ley.

El anexo I presenta las principales normas, convenios internacionales y recomendaciones en la materia, aprobados por las Naciones Unidas y que delimitan el estado actual de la cuestión.

Por último, el anexo II, denominado: el Sistema Penitenciario Federal en Números, pretende brindar una imagen cuantitativa del problema en nuestro país en sus variables más relevantes.

La intención que persigue este equipo de trabajo es que el lector de este documento preliminar, se introduzca en el mundo de la administración penitenciaria, y que salga de él con una comprensión de los aspectos esenciales de esta política pública, de su complejidad, de los aspectos multidisciplinarios involucrados, y de la situación de la misma en nuestro país, como base para el análisis y diseño de futuras investigaciones en la materia.

Capítulo I: Delito y Sistema Penitenciario

La política criminal en nuestro país constituye una de las políticas públicas de mayor crecimiento en cuanto a su problematización social en los últimos años. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro medio, sino que es compartido por la mayoría de las naciones del mundo.

Los cambios evidenciados en las formas de producción, en las modalidades de interacción entre los países y entre los sectores productivos y financieros, así como las transformaciones internas producidas en los mismos, han tenido su impacto en el fenómeno delictuoso.

Así, el crecimiento de los indicadores del delito representan sólo la punta del iceberg de este fenómeno complejo que viene sufriendo trascendentes transformaciones ante las que las tradicionales formas de organización de las instituciones encargadas de analizar, prevenir, reprimir y castigar el delito no encuentran las respuestas adecuadas.

En este marco, la política pública en materia penitenciaria no está ajena a este problema. El crecimiento del delito, el grado creciente de "prisionización" de la sociedad, el aumento de las penas para cierto tipo de delitos, los cambios cualitativos en los delitos asociados con la violencia y con el delito transnacional, la incorporación a la población penal de sectores tradicionalmente no alcanzados por la sanción que implica la privación de la libertad en la cárcel (individuos de sectores medios y altos implicados en tráfico de drogas, evasores impositivos, etc.) constituyen desafíos ineludibles para el gerenciamiento adecuado de esta área de gobierno.

Desafíos, que implican revisar el complejo conjunto de mecanismos institucionales y presupuestarios puestos en juego en la materia.

Así, como otros países de América Latina y el Caribe, la Argentina sufre el crecimiento de las tasas de hechos violentos y actividad delictiva desde la década de 1980, encontrándose este fenómeno principalmente concentrado en las grandes áreas urbanas.

La respuesta institucional frente a la violencia y el delito a nivel gubernamental, nacional y provincial, así como también en la esfera privada, se ha caracterizado por su debilidad institucional.

Esta debilidad resulta extensiva a la planificación, coordinación y articulación con otras instancias, a la información científica sobre el delito no procesada mediante sistemas informáticos, así como a otras causales que se enunciarán más adelante.

Aunque la seguridad ciudadana comienza a ser percibida como una cuestión para ser encarada desde la perspectiva multidisciplinaria y, con la participación del conjunto de la sociedad civil, hasta el presente se avanzó escasamente en la integración de los esfuerzos en seguridad, prevención del delito, política criminal y política penitenciaria.

En cuanto a la participación ciudadana, a pesar de diversas iniciativas encaradas en varias jurisdicciones, ella se ve limitada por barreras estructurales de diverso orden: asimetrías entre los representantes del Estado y la ciudadanía, así como dentro de la propia sociedad civil; falta de conocimientos integrados y científicos acerca de metodologías participativas; escasa divulgación de las prácticas exitosas o prometedoras; falta de una permanente articulación entre las distintas organizaciones de la sociedad civil entre sí y con las comunidades; y escasa participación de la población joven.

En materia de protección y resguardo de los Derechos Humanos de los habitantes por las policías, se reconoce una escasa articulación, según los casos, entre el discurso y las prácticas cotidianas de la cultura institucional.

En cuanto al rol de los fiscales, ellos se encuentran en muchos casos superados por la cantidad de causas que los alejan de una intermediación con la investigación. A su vez, la legislación procesal se encuentra en revisión respecto de las funciones de policía y de la intervención judicial y fiscal en la investigación del delito.

En lo que respecta a la violencia juvenil, la cual constituye de por sí un punto de intersección a explorar entre la política de seguridad y la política criminal, se destaca un descenso en la edad del autor o partícipe criminal, con rasgos crecientes de violencia, en un contexto

en el cual más del 13% del total, lo que representa alrededor de 1,25 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, reflejando una situación preocupante de exclusión social.

A la escasa disposición de coordinación e intercambio de información por parte de los distintos ámbitos involucrados en el sector seguridad y penitenciario, se le suman los escasos medios tecnológicos, de infraestructura y recursos presupuestarios aplicados a la problemática. En particular se puede mencionar: la falta o inadecuada gestión y estandarización de la información sobre delitos para su uso cotidiano a nivel policial y de investigación; deficiencias en la toma de denuncias en sede policial y en la sistematización de los procesos administrativos y de recopilación de información sobre hechos criminales en fiscalías; carencia de una adecuada infraestructura informática que otorgue soporte al uso racional, compartido y en tiempo real de la diversidad de información disponible.

En definitiva, debilidades en la articulación práctica del Sistema de Seguridad Interior y en particular del Esfuerzo Nacional de Policía, y entre éstos y el Sistema Penal y Penitenciario.

Sintetizando, otros aspectos que enmarcan la situación, incluyen:

- Una histórica escasa incidencia de las áreas y política de seguridad en el conjunto de las políticas y estrategias de gobierno;
- Excesiva distancia entre lo normado y lo actuado en materia de seguridad;
- Persistencia de hechos que involucran a personal policial en abusos, corrupción y vulneraciones de derechos humanos;
- Escasa importancia asignada a las instancias de control externo e interno para prevenir y actuar frente a abusos policiales y casos de corrupción.
- Escasos incentivos profesionales en virtud de las limitaciones presupuestarias conocidas.
- Incremento de víctimas policiales y civiles en enfrentamientos armados.

- Escasa capacidad para la gestión de proyectos innovadores en materia de prevención del delito y la violencia.
- Falta de diseño, en los organismos competentes, de estrategias coordinadas que contribuyan al desarrollo de políticas comunes en materia de seguridad, policía y penitenciaria que orienten una acción profesional volcada al ejercicio de funciones con niveles de excelencia.
- Limitaciones objetivas para el fortalecimiento de la actividad de inteligencia criminal.
- Falta de soluciones a la superpoblación carcelaria.
- Sustento normativo confuso en materia de seguridad privada e inadecuada relación de estas empresas con las policías en función de un alerta temprana para prevenir delitos.
- Disparidad de criterio judicial respecto a la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en las grandes alteraciones del orden público.
- Falta de organización de la Policía Judicial conforme lo establece el Código de Procedimientos Penal.
- Falta de avances en materia de coordinación de esfuerzos entre el Gobierno Federal y las Provincias, mediante un efectivo apoyo a los gobiernos locales en la atención de situaciones de peligro derivadas de la crisis.
- Divorcio entre el discurso y la acción, entre las normas y su cumplimiento, y entre las políticas y estrategias, por un lado, y los presupuestos asignados y los objetivos buscados, por otro.

Capítulo II: Sistema Penitenciario Federal

El Sistema Penitenciario Federal es la integración del Servicio Penitenciario Federal (SPF), organismo ubicado en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de los Servicios Penitenciarios ubicados en jurisdicciones provinciales.

Perteneciendo a ámbitos jurisdiccionales distintos, las administraciones, la complejidad de los servicios y muchas modalidades operativas son diferentes. Lo que no debiera ser diferente es la forma de ejecución de la pena privativa de libertad, ya que existe un único Código Penal y un único catálogo de penas y medidas.

Por ende, sin introducir un motivo de conflicto entre la Nación y las Provincias, debe existir un esfuerzo de aquélla para contribuir al desarrollo científico y al perfeccionamiento práctico de la ejecución penal en todo el territorio nacional.

El Servicio Penitenciario Federal, como órgano ejecutor de la pena privativa de la libertad en nuestro país, es una compleja organización que cuenta en la actualidad con alrededor de 9.000 agentes encargados de administrar la pena privativa de libertad de 10.000 internos.

La Ley N° 20.416 establece que el Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad de la Nación dedicada a la custodia y guarda de los procesados, y a la ejecución de las sanciones privativas de libertad, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor.

Su objetivo es asegurar, como órgano desconcentrado, el cumplimiento de la custodia y guarda de los procesados y la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad y, posibilitar la reinserción social de los internos.

Estos objetivos deben ser complementados con las pautas establecidas en la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, en la que se establece que la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene como objetivo lograr que el condenado adquiera la

capacidad de comprender y respetar la Ley procurando su adecuada reinserción social con la comprensión y apoyo de la sociedad.

Además de su objetivo central, el SPF tiene a su cargo la administración de un régimen de retiros y pensiones a cargo de la Dirección de Retiros y Pensiones, que tiene su sustento legal en la Ley N° 13.018, como así también una Obra Social para su personal, denominada Dirección de Obra Social bajo el amparo de la Ley N° 20.416 (artículos 21 y 36 inciso i) y sus modificatorios.

Por su parte, para su mejor administración y, con el objeto de producir recursos financieros para ser aplicados a los fines de la Ley N° 24.660, cuenta con el Ente de Cooperador Penitenciario (Ley N° 24.372), que tiene como objeto coadyuvar con el SPF en la misión de lograr la reinserción social del interno a través del aprendizaje del trabajo.

Para el cumplimiento de su misión, el SPF cuenta con diversas unidades de detención distribuidas por todo el país de acuerdo al siguiente detalle:

- Unidad 2.- Instituto de Detención de la Capital Federal (Devoto)
- Unidad 3.- Instituto Correccional de Mujeres (Ezeiza)
- Unidad 4.- Colonia Penal de Santa Rosa (La Pampa)
- Unidad 5.- Colonia Penal "Subprefecto Rocha" (Gral Roca – Pcia. Rio Negro)
- Unidad 6.- Instituto de Seguridad y Resocialización (Rawson – Pcia. Chubut)
- Unidad 7.- Prisión Regional del Norte (Resistencia – Pcia. Chaco)
- Unidad 9.- Prisión Regional del Sur (Pcia. Neuquén)
- Unidad 10.- Cárcel de Formosa (Pcia. Formosa)
- Unidad 11.- Colonia Penal "Presidencia Roque Saenz Peña" (Pcia. Chaco)
- Unidad 12.- Colonia Penal Viedma (Pcia. Rio Negro)
- Unidad 13.- Instituto Correccional de Mujeres (Pcia. La Pampa)
- Unidad 14.- Cárcel de Esquel (Pcia. Chubut)
- Unidad 15.- Cárcel de Río Gallegos (Pcia. Santa Cruz)
- Unidad 17.- Colonia Penal de Calendaria (Pcia. Misiones)
- Unidad 18.- Casa de Pre egresos (Capital Federal)
- Unidad 19.- Colonia Penal de Ezeiza (Pcia. Buenos Aires)

- Unidad 20.- Servicio Siquiátrico Central Varones (Capital Federal)
- Unidad 21.- Centro de Tratamiento de Enfermedades de alta complejidad (Htal Muñiz – Capital Federal)
- Unidad 24.- Instituto de Detención para Jóvenes Adultos (Marcos Paz – Buenos Aires)
- Unidad 25.- Instituto Correccional de Gral Pico (La Pampa)
- Unidad 27.- Servicio Siquiátrico Central de Mujeres (Capital Federal)
- Unidad 28.- Centro de Detención Judicial (Capital Federal)
- Unidad 29.- Alcaidía Penal Federal (Capital Federal)
- Unidad 30.- Instituto de Jóvenes Adultos (La Pampa)
- Unidad 31.- Cárcel Federal de Mujeres (Ezeiza – Buenos Aires)
- Unidad 32.- Centro de Detención Judicial de Mendoza (Mendoza)
- Complejo Federal I Ezeiza (Buenos Aires)
- Complejo Federal II Marcos Paz (Buenos Aires)

Estructura y Organización

La situación organizativa y de administración general de la institución presenta las siguientes características:

- La estructura organizativa del SPF se encuentra aprobada por Decisión Administrativa N° 516/96 hasta su primer nivel operativo. Respecto a los niveles inferiores en muchos casos existen estructuras aprobadas que están totalmente desactualizadas y, en otros casos, no existe estructura aprobada siendo su organización de tipo informal.
- No existen Manuales de Procedimientos para el organismo, existiendo procesos que han sido implementados en algún momento de la historia de la organización y que han sobrevivido por tradición.
- Existen superposición de funciones entre diversas áreas de la organización, quedando la resolución de estas cuestiones en el

ámbito de los estilos de liderazgo que las autoridades de cada área desarrollen.

Recursos Humanos

- Existe un importante problema de interpretación y aplicación de la normativa vigente en materia de administración de recursos humanos, lo que lleva a la existencia de gran cantidad de reclamos y recursos judiciales, tanto para el personal en actividad como para los agentes retirados.
- Mala distribución del personal, existiendo áreas en las que existe sobrepoblación y otras en las que la dotación de personal es insuficiente. En general, las áreas de administración cuentan con exceso de agentes y las vinculadas al quehacer penitenciario mas específico, como la guarda de los internos, presentan deficiencias en la cantidad de agentes asignados. A pesar de ello, la organización no cuenta con estudios ni análisis relativos a la distribución de sus recursos humanos en relación a las efectivas necesidades del servicio diario.
- La normativa que regula la administración de los recursos humanos, tal como el "Régimen de Calificaciones, Ascensos y Eliminaciones del Personal" o el "Régimen Disciplinario del Personal", es de una gran antigüedad –alrededor de treinta años-, y no presenta modificaciones que le permita adecuarse a la realidad vigente en la organización.
- No se aplica lo determinado en la Ley N° 24.660, en materia de capacitación y formación del personal.
- El sistema de organización del personal en Escalafones y Subescalafones es sumamente rígido y provoca situaciones de desaprovechamiento del potencial de los recursos humanos existentes.
- El sistema de retiros –voluntarios y/o involuntarios- provoca una constante reducción de la relación agentes en actividad/agentes en retiro. Esta situación conlleva un paulatino agravamiento en la situación financiera del sistema de retiros de la organización.

- Existe un gran nivel de discrecionalidad en el proceso de evaluación del personal por parte de la “Junta de Calificaciones, Ascensos y Eliminaciones”, dado que los procedimientos para su funcionamiento no están claramente explicitados, generándose un gran número de recursos –en instancia administrativa y judicial-.

Cursos de acción

En base al cuadro de situación en el que se encuentra el Servicio Penitenciario Federal, un auténtico programa de reformas tendientes a su fortalecimiento y potenciación debiera incluir como puntos fundamentales los siguientes:

- Dotar al Servicio Penitenciario Federal de dinamicidad y dimensión adecuada, con un sólido respaldo legal a la misión institucional, responsabilidad, competencia y roles de la Dirección Nacional, Organismos de apoyo y Unidades Operativas.
- Incorporar tecnología organizativa moderna, profundizando los mecanismos de centralización normativa y descentralización operativa, adecuando la organización a sus principios rectores de unicidad, exclusividad y especificidad operativa.
- Diseñar un cuerpo legal integral que regule el sistema de carrera del personal penitenciario. El nuevo régimen de carrera deberá contemplar: un rediseño escalafonario, una desmilitarización de las áreas de servicio social y creación de una especialidad en seguridad con un cuadro único, la capacitación permanente, la adecuación y determinación de puestos y perfiles, el acceso a cargos por concurso con un adecuado sistema de selección transparente, la implantación de un sistema de evaluación de desempeño con priorización de la productividad y la capacitación en la evolución de la carrera.
- Revertir el déficit financiero del sistema de retiros y pensiones mediante la generación de nuevos mecanismos de

financiamiento tanto por la revisión de la permanencia y edad requeridos para acceder al retiro voluntario y obligatorio como por la incorporación de recursos al sistema, similares a los existentes en otros regímenes previsionales especiales.

- Generar el consenso necesario a efectos de contar con los recursos presupuestarios suficientes para llevar adelante el Plan de Obras Penitenciarias.

Capítulo III: Administración Penitenciaria

Una condición necesaria para que la política criminal de cualquier estado constituya un arma eficaz contra el delito está constituida por la gestión de cárceles seguras y ordenadas. Resulta clave en la reducción de la tasa de criminalidad la forma en que se trata a los internos en los establecimientos carcelarios, lo que requiere una alta capacitación profesional del personal penitenciario, enmarcada en el respeto permanente de los derechos humanos.

Operativamente, la gestión carcelaria debería estar orientada a preservar un equilibrio entre los siguientes aspectos:

- Seguridad: los establecimientos carcelarios reciben a los reclusos y deben evitar que los mismos se fuguen.
- Control: la vigilancia sobre los reclusos debe asegurar que no se produzcan motines.
- Justicia: los reclusos deben recibir un trato humano y equitativo, preparándolos para su vuelta a la sociedad.

El orden a su vez requiere la existencia de reglamentos y normas de comportamiento interno que sean ecuanimes, claros, justos y conocidos por los reclusos. Desde el punto de vista de los funcionarios del servicio penitenciario, su conocimiento constituye parte de su capacitación profesional. De esta manera, cada individuo que participa de la vida carcelaria conoce cuáles son sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos.

La experiencia de los establecimientos carcelarios, en Argentina y en otros países, nos muestra que en la mayoría de los casos no se logra el buscado equilibrio: se prioriza sobremanera la seguridad y el control, en desmedro de los aspectos relacionados con la justicia en el trato a los reclusos. Esto se traduce en métodos de control brutales, castigos ilegales, medidas disciplinarias injustas y exclusión total o parcial de programas de rehabilitación. De manera paralela, surgen grupos de

reclusos que ejercen formas de control ilegal, que llegan a convivir en un equilibrio inestable con los mecanismos de control institucionales.

Los programas de rehabilitación y seguridad

Para que la realización de los programas de rehabilitación no afecte los patrones mínimos de seguridad, se deben establecer procedimientos claros que definan el nivel adecuado de seguridad tanto para la prisión como para cada recluso en particular.

La rehabilitación de los reclusos debe estar guiada por los siguientes principios:

- El tiempo que los reclusos se ven privados de su libertad debe aprovecharse para lograr, en la medida de lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino que sea capaz de hacerlo.
- Las condiciones mas favorables para la readaptación deben diferenciarse en función de los distintos niveles de seguridad de cada grupo de reclusos. Las autoridades penitenciarias son quienes van a evaluar el peligro que supone cada recluso en particular y las consecuentes medidas de seguridad que requieren su estadía en el establecimiento carcelario. La evaluación debe considerar el riesgo que puede suponer para la comunidad la eventual fuga del recluso y la probabilidad de que intente fugarse.
- Las medidas de coerción, como el uso de esposas, cadenas o camisas de fuerza, nunca deben ser aplicados como sanciones. Su uso debe restringirse en el mayor grado posible, limitándose a situaciones como la prevención de una fuga durante un traslado, como respuesta a prescripciones médicas o cuando se quiera evitar que el recluso se lesione a si mismo, a terceros o que produzca daños.

Si bien existen reclusos peligrosos que requieren máximas medidas de seguridad, puede preverse que solo un pequeño número tenga que ser

sometido a este tipo de régimen de vigilancia casi permanente. Por norma general, los reclusos solo estarán confinados en condiciones especiales de máxima seguridad cuando su conducta demuestre que representan tal amenaza para la seguridad que la administración penitenciaria no tiene otra opción. La gran mayoría de los reclusos requieren medidas de seguridad medias, que se corresponden con aquellos que si bien no tienen intenciones de fugarse representan cierto peligro para la comunidad en caso de producirse una fuga. En estos casos debe estar permitido el traslado interno de los reclusos con mucha menor vigilancia directa. Para los casos de reclusos condenados por delitos no violentos y que en poco tiempo terminan sus condenas, se deben prever condiciones mínimas de seguridad (conocidas como régimen abierto), con casi nula seguridad en el perímetro.

Los niveles de seguridad de los reclusos deben ser revisados periódicamente a medida que van cumpliendo sus condenas. En esta evaluación también es importante el papel a desempeñar por parte de los funcionarios del servicio penitenciario. Debe tenerse en cuenta que lo normal es que una persona represente un menor riesgo de seguridad a medida que se acerca la fecha de su liberación.

En cuanto a la seguridad relacionada con los aspectos físicos de configuración edilicia de las cárceles (solidez de muros, barrotes en las ventanas, puertas de las celdas, vallas del perímetro, torres de vigilancia y las medidas de seguridad como cámaras, sistemas de alarma o radios), se requiere que su definición tenga en cuenta el respeto por la dignidad del individuo, tanto en aspectos como el acceso a la luz natural y al aire fresco, como en la preservación de cierta privacidad personal.

En cuanto al registro de los espacios físicos y de los individuos, deben existir procedimientos claros que describan las circunstancias de su realización, los métodos a aplicarse y su frecuencia. Nuevamente, si bien se procura evitar las fugas, se debe proteger la dignidad de los reclusos y de sus visitantes, debiéndose contemplar:

- La definición de las circunstancias en que se admite este tipo de registros

- La garantía de que los reclusos no sean humillados durante el proceso, como por ejemplo cuando se los obligan a desnudarse.
- Que los reclusos sean registrados por funcionarios de su mismo sexo.
- La prohibición al personal de seguridad de realizar registros de las cavidades del cuerpo de recluso.
- El derecho de los visitantes al respeto de su privacidad.

Por mas poderosas que resulten las condiciones de seguridad, se debe seguir permitiendo el contacto con el mundo exterior en condiciones razonables. Ello ayuda al proceso de rehabilitación, a la estabilidad de la prisión y, fundamentalmente, salvaguarda los derechos individuales de los reclusos. Los principios a aplicarse respecto a este tema son los siguientes:

- Se debe dar información exacta sobre la detención de cualquier persona y el lugar en la cual se cumple, a los miembros de su familia, su abogado o cualquier persona que tenga interés legítimo en conocer esa información, salvo voluntad en contrario manifestada por las personas privadas de su libertad.
- Se debe garantizar a la persona detenida la posibilidad de entrevistarse con su abogado con la confidencialidad necesaria.
- Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares y de tener correspondencia con ellas y adecuada comunicación con el mundo exterior, conforme los reglamentos que se dictan al respecto.
- Los lugares de detención deben poder ser visitados por personas calificadas nombradas por una autoridad competente distinta de la autoridad directamente encargada de su administración, a fin de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos pertinentes.

En todas las prisiones la posibilidad del conflicto está siempre latente, debiendo existir en consecuencia un conjunto claro de procedimientos

para enfrentar este tipo de situaciones en el caso que se produzcan. Al respecto, las reglas para la aplicación del uso de la fuerza deben respetar los siguientes principios:

- El uso de la fuerza por los funcionarios penitenciarios se debe limitar a la medida estrictamente necesaria, informándose inmediatamente a las autoridades del establecimiento. La legítima defensa, la tentativa de evasión o de resistencia por la fuerza, son situaciones justificantes de su utilización.
- Se debe limitar al máximo el uso de armas por parte del personal que está en contacto directo con los reclusos, ya que es alto el riesgo de que sean utilizadas inadecuadamente o de que caigan en manos de los reclusos. En los casos de utilización necesaria, las armas no deben portarse de manera ostentosa ni amenazante.
- El personal penitenciario debe estar entrenado especialmente para dominar a los reclusos violentos.
- El uso intencional de las armas se debe restringir a las situaciones de protección de vidas, defensa propia o de terceros y al impedimento de fugas. Todo ello en la medida que no resulte posible utilizar otros medios menos dañosos.

No obstante, de la observación de los conflictos recurrentes en los establecimientos carcelarios puede deducirse que la mejor regla es la prevención. Es raro que un incidente importante se produzca sin que previamente hayan existido indicios del mismo y los funcionarios responsables siempre podrán percibir las situaciones de tensión. Al respecto resulta importante que los funcionarios establezcan canales de diálogo con los reclusos, que en el caso de eventuales incidentes podrán derivar en instancia de negociación tendientes a solucionarlos. Solo si estos métodos fracasan o son considerados inadecuados en determinada circunstancia, podrán considerarse métodos físicos para restablecer el orden.

Medidas de seguridad especiales se podrán aplicar a los reclusos que se resisten de manera sistemática a las pautas de control y seguridad,

debiendo mantenerse en los niveles mínimos imprescindibles. Las recomendaciones para este tipo de medidas son las siguientes:

- Aplicar las medidas de seguridad especiales en los casos que resulten absolutamente necesarios.
- Las medidas de seguridad se aplicarán de una manera que se respete la dignidad y los derechos humanos.
- Efectuar revisiones periódicas para asegurar que el tiempo pasado en custodia bajo seguridad reforzada y el nivel de seguridad aplicado no excedan de lo necesario.
- Proporcionar el adiestramiento adecuado a los funcionarios relacionados con la custodia y tratamiento de los reclusos peligrosos.

Las prácticas comunes de medidas de seguridad especiales se orientan a la colocación de los reclusos en situaciones de aislamiento, bien solos o con no mas de dos o tres reclusos, sin acceso a ninguna otra actividad o estímulo externo. Las alternativas a este tratamiento pasan por técnicas de aislamiento grupales, con un mayor grado de movimiento dentro de perímetros seguros. Siempre debe procurarse que la afectación de estos grupos de reclusos a las medidas especiales constituya la excepción.

El problema de los menores

La edad límite para determinar la imputabilidad de los menores varía según los distintos países. En nuestro país la ley 22.278, que regula el régimen penal de minoridad, establece que no resultan punibles los menores que no haya cumplido los dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años.

El principio general es que los menores no deben estar en prisión y deben ser entregados a la custodia de un organismo de bienestar social y no a uno que pertenezca al sistema de justicia penal. La

decisión de encarcelarlos deberá adoptarse solo si no existe ninguna otra alternativa. En el caso de los menores sus efectos nocivos se potencian, constituyendo las cárceles verdaderas escuelas del delito, con el consecuente impacto sobre las tasas de reincidencia.

Claro que los datos de la población carcelaria nos muestran un fenómeno peligroso: el incremento del número de menores de edad. Ello obedece básicamente a dos tendencias convergentes:

- Las condenas mas duras como instrumento para luchar contra la delincuencia juvenil.
- La detención como solución al creciente número de “chicos de la calle”, aun incluso sin la orden judicial pertinente.

Estos menores deben ser tratados de manera especial. Los menores son mas vulnerables que los adultos, por lo que deben ser protegidos contra los actos de violencia o abusos de los prisioneros mayores, o incluso de los funcionarios. Por otro lado, los menores tienen mayores probabilidades de responder a influencias positivas y a las oportunidades de capacitación y educación.

El tema ha sido objeto de tratamiento por la “Convención sobre los Derechos del Niño”, en cuyo artículo 37 se establece que los Estados parte velarán porque:

- Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente, utilizándose a la prisión tan solo como medida de último recurso y durante el período mas breve que proceda.
- Todo niño privado de su libertad debe ser tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, teniendo en cuenta las necesidades de las personas de su edad. Los menores deben estar separados de los adultos a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño. Los menores tienen derecho a mantener contacto con su familia, salvo circunstancias excepcionales.
- Todo niño privado de su libertad tiene derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica, así como a impugnar la legalidad

de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

La administración de justicia de los menores debería complementarse con aspectos tales como la adopción de medidas sustitutivas de la prisión (como el traslado a un hogar o institución educativa), la prestación en los lugares de custodia de la asistencia social, educacional, profesional, psicológica, médica y física que requieran según su edad, sexo y características individuales, la confidencialidad de los registros relacionados con la detención y el tratamiento equitativo de los menores de ambos sexos. Resulta importante que se procuren establecer sistemas intermedios como establecimientos de transición, hogares educativos, centros de capacitación y otros sistemas pertinentes que permitan facilitar la adecuada reintegración de los menores a la sociedad. Los maestros y demás personal docente deben proceder de las instituciones educativas locales y los certificados y diplomas obtenidos por los menores deben ser expedidos por los centros educativos locales y no por la administración penitenciaria.

Otro aspecto importante es la capacitación diferenciada que debe tener el personal penitenciario para el tratamiento de los menores. El trabajo con reclusos menores requiere de una serie de aptitudes especiales, que debe combinar los requisitos de seguridad y orden con la obligación de ayudar a los menores en su maduración y al desarrollo de aptitudes personales que les permitan llevar una vida provechosa para la comunidad.

En el caso de los menores, el mantenimiento y desarrollo de los vínculos familiares tiene mayor trascendencia. En la medida de lo posible se debe permitir cortas visitas a los hogares durante el cumplimiento de las condenas y se debe alentar las visitas de las familias a los establecimientos. Resulta importante hacer participar a las familias en las decisiones acerca del tratamiento que sus hijos reciban mientras estén bajo custodia.

Capítulo IV: Alternativas al uso de la prisión

Durante los últimos años se ha verificado a nivel mundial el fenómeno del incremento incesante de la población carcelaria. El ejemplo mas significativo está dado por los Estados Unidos, donde la población penitenciaria pasó de menos de medio millón en 1980 a más de dos millones en la actualidad, pero también resultan importantes las cifras en otros países de diferente desarrollo relativo como Argentina, India, Indonesia, Noruega o Islandia. Ello obedece a que se envía a prisión no solo a las personas que cometen delitos graves, sino que también a quienes no tienen condena y aún se encuentran procesados (en nuestro país este hecho constituye la principal causa de sobrepoblación carcelaria en la Unidad de detención de Devoto), las personas que sufren enfermedades mentales, los usuarios de drogas prohibidas y a menores de edad.

Sin embargo este fenómeno no se ha visto complementado con la asignación de los recursos físicos y humanos adicionales que resultan necesarios para la atención del mayor número de reclusos. El resultado no ha sido mas que el hacinamiento en las condiciones de detención, con el consecuente agravamiento de la aflicción ocasionada por la privación de la libertad, la violación de los derechos humanos de los reclusos y el perjuicio sobre el trabajo necesario para la reinserción posterior en la sociedad.

Si bien los administradores penitenciarios tienen como responsabilidad primaria la gestión de sus sistemas, pueden cumplir un papel importante en la puesta en conocimiento de la opinión pública de la sobrepoblación, de estas condiciones de hacinamiento y de la falta de recursos físicos y humanos.

Por ello, aun cuando no tengan ningún control sobre el número de personas que son enviadas a prisión, no resulta descabellado sostener que las administraciones de los establecimientos carcelarios tienen un interés particular en la disminución de la población que atienden, sea

por la reducción de las condenas, la disminución del régimen de prisión preventiva o, fundamentalmente, a través de sistemas alternativos a la prisión. Si quienes han cometido delitos leves son sentenciados a penas no privativas de la libertad, la administración penitenciaria podrá utilizar los recursos disponibles para trabajar con mayor eficacia en el tratamiento de aquellos para quienes el encarcelamiento es la única opción.

Estos sistemas alternativos a la custodia pueden aplicarse antes de ir a juicio, en el momento de la sentencia o con posterioridad a la misma. A las administraciones penitenciarias deben interesarles estas disposiciones posteriores a la sentencia, teniendo un papel importante en el último tramo de la condena a prisión y su sustitución por un régimen de sanciones no penitenciarias. Pueden aportar material interesante para el dictado de la legislación pertinente, sobretodo a partir de sus conocimientos de la eficacia del sistema de sanciones existente, de la diversidad de reclusos que administra el servicio penitenciario y de la probabilidad de que los condenados cumplan con los requisitos de castigos no privativos de la libertad.

Las medidas posteriores a la sentencia que pueden aplicarse son:

- Permisos y centros de transición (como la Unidad N° 18 del SPF denominada Casa de pre egreso, ubicada en Capital Federal)
- Liberación con fines laborales o educativos.
- Distintas formas de libertad condicional.
- La anistía.
- El indulto.

El criterio a seguirse durante el período de ejecución de la sentencia deberá ser el tratamiento permanente de la posibilidad de la puesta en libertad del recluso y su asignación a los programas no privativos de la misma. En caso de solicitarlo el recluso, la decisión tomada al respecto deberá ser sometida a revisión judicial.

Capítulo V: Control institucional y social

Teniendo en cuenta la naturaleza de estos establecimientos cual es la de aislar a hombres y mujeres de la sociedad contra su voluntad, la posibilidad del ejercicio arbitrario del poder sobre los mismos es frecuente. Por esta razón, el control de la sociedad en estos ámbitos es fundamental.

Permite verificar el adecuado cumplimiento de la ley dentro del penal mismo y constituye una herramienta doblemente eficaz. Por un lado, monitorea el adecuado cumplimiento las normas internas hacia los reclusos, y por otro, protegen a los funcionarios de la unidad carcelaria de alguna denuncia infundada, si existiese. Por estas razones, estos tipos de inspecciones para ser válidas deben abarcar todos los aspectos de la vida carcelaria.

En Argentina, existen diversas instancias y organizaciones públicas y privadas que realizan actividades de control e inspección sobre el SPF.

La Procuración Penitenciaria, dependiente del Poder Legislativo, tiene como misión el resguardo de los derechos de los internos. Su actuación se implementa a través de inspecciones a las unidades, en las que se verifica el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de derechos humanos y de la denominada progresividad del régimen. Este último aspecto, consiste en el avance, de acuerdo con un sistema de calificaciones del comportamiento y colaboración del interno, en los grados de libertad que el mismo puede desarrollar dentro de la Unidad y en el tipo de actividades a las que tiene acceso.

Otro organismo que realiza el control sobre el cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad es la Sindicatura General de la Nación. Este organismo realiza inspecciones periódicas a las distintas unidades con el objeto de verificar su cumplimiento, realizando informes de auditoría que son puestos en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Dentro del ámbito de la sociedad civil, existen varias organizaciones que realizan periódicas visitas a las Unidades de detención formulando

observaciones que son remitidas al Ministerio. Entre las más importantes, por el volumen de trabajo realizado en el ámbito penitenciario, se encuentra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Este aspecto del control social sobre el SPF es importante, ya que cuando una unidad tiene intercambio frecuente con las asociaciones civiles de la sociedad en la que se encuentra implantada, se produce naturalmente el control la administración de la misma, constituyéndose en un control informal aportando asimismo, una visión distinta a la de los funcionarios penitenciarios.

Los visitantes interactúan con los funcionarios y entran en contacto con los reclusos de un modo que les permite observar los problemas y detectar indicios de abusos.

Los resultados de estas inspecciones deberán ser conocidas por las autoridades competentes de la unidad, por las autoridades de quién ésta dependa y por la sociedad.

Control Administrativo

Independientemente al control de la sociedad al funcionamiento de las administraciones penitenciarias, existe la necesidad de un control administrativo sobre cada unidad en particular y dentro de la organización de supervisión y control del sistema penitenciario en general.

Dentro del Ministerio, la propia Unidad de Auditoría Interna, realiza informes periódicos, centrando especialmente su atención, en los aspectos de control presupuestario y ambiente de control interno del SPF.

Se refiere a una auditoria de procedimientos y abarcan la totalidad de las actividades reguladas por la autoridad penitenciaria. Hace hincapié en como se hacen las cosas y los procedimientos utilizados.

Sin embargo, es altamente recomendable que las inspecciones formales realicen consultas con los visitantes frecuentes que ejercen el control social arriba mencionado.

Control Independiente

El concepto de inspección independiente, está garantizado en los convenios y tratados internacionales sobre el tema. Prevén, además, la privacidad en la comunicación de los reclusos con el inspector a efectos de asegurar la libre exposición de las cuestiones internas al penal.

Tanto de la experiencia de los controles sociales locales a través de inspecciones regulares como de la interacción informal con los reclusos y los funcionarios a partir de la intervención de las fuerzas vivas locales; como así también, como resultado de las auditorías e inspecciones formales ordenadas por los distintos estamentos del estado y de organismos internacionales, debería haber aportes en dos sentidos. Uno referido al control del cumplimiento de las normas, y otro, referido a como mejorarlas y así, contribuir al mejor cumplimiento de las mismas.

Los reglamentos

Funcionarios, visitantes y reclusos deben poder comprender la importancia de los reglamentos y cumplirlos, para que un sistema de estructura jerárquica como los servicios penitenciarios funcione adecuadamente.

Es importante que la normativa además de ser clara, se implemente con justicia y equitatividad, con el fin de evitar toda sensación de injusticia por parte de los reclusos. Para los casos en que de igual modo perciban un trato injusto, deben implementarse prácticas claras que permitan la formulación de denuncias o peticiones a las autoridades.

Los reclusos tendrán a su disposición procedimientos que les permitan exponer problemas administrativos ante sus supervisores inmediatos. En caso de no encontrar solución podrán hacerlo ante las autoridades a cargo de la prisión o a la autoridad superior externa. Puede existir un procedimiento de peticiones externo ante diversos organismos, como un Defensor del Pueblo.

Debe quedar claro y garantizar, que no habrá represalias a los reclusos que presenten denuncias o peticiones. Es posible que por miedo a las

represalias los reclusos se abstengan de hacer las denuncias dado el sistema en el que deben habitar bajo el control de aquellos a quienes querrían denunciar.

De no poder presentar denuncias personalmente, los familiares de los reclusos, sus abogados o cualquier otra persona que conozca el caso y la imposibilidad de que lo hagan los anteriores, podrá hacer la petición ante la autoridad que corresponda.

Una buena administración penitenciaria debería tener por objeto evitar que sean necesarias las denuncias graves.

Los procedimientos claros que resguardan la vida cotidiana en la prisión, son el mejor método. Deberán redactarse de manera clara, ser comprensibles y conocidos por todos los interesados (penitenciarios, visitantes y reclusos), entregarse a cada uno de los reclusos y figurar en lugares visibles de la prisión.

El material entregado debe contener una descripción del modo que corresponde actuar a un recluso para elevar una petición o crítica, los canales a utilizar y ante quienes puede hacerlo.

La instrucción disciplinaria no debe integrarse con normas u otros elementos que puedan poseer efectos disuasivos de la voluntad de los reclusos para elevar reclamos.

El factor disuasorio más importante es el miedo a las represalias, es por ello que debe quedar claro que no serán sancionados de ninguna forma. Ante la necesidad debe existir la posibilidad de poder presentar las denuncias en forma anónima.

Las autoridades penitenciarias deberán vigilar la no existencia de revanchas contra el recluso, dado que la persona denunciada debe ser puesta en conocimiento de la existencia de tal denuncia.

La administración penitenciaria va a tener que encargarse de reducir en lo posible la gravedad de lo denunciado, resolviendo rápidamente el inconveniente, incluso antes que el mismo se produzca, con normas claras que regulen los asuntos de rutina o trato cotidiano, fuente principal de denuncias.

Fomentar la buena relación entre funcionarios y reclusos es un método apropiado para reducir la gravedad del conflicto o su pronta solución.

Por otra parte un funcionario experimentado sabrá que asuntos tendrá que resolver personalmente y cuales derivar y podrá explicar el proceso al recluso. Un buen procedimiento facilitará que el recluso reciba respuesta a la mayor brevedad posible. Si esta es negativa deberá ser explicada.

Todas aquellas peticiones que no puedan ser resueltas de modo informal, deberán tramitarse según el procedimiento establecido. El recluso podrá hacer su presentación en forma verbal o escrita y sin que importe el modo se deberá llevar un registro escrito de las quejas y de las respuestas dadas.

El procedimiento sobre peticiones y denuncias deberá tener previsto el plazo en que se entregará la respuesta, siendo siempre el menor posible. Ante la posibilidad de que el proceso deba apartarse de los caminos previstos, se estimará un plazo de respuesta que se informará al interesado.

Existirá un procedimiento que permita a los reclusos elevar peticiones o denuncias confidenciales ante una autoridad superior, dado que en interés de la justicia debe estar previsto que un recluso no deba presentar su denuncia ante el mismo funcionario denunciado.

La existencia de canales externos para la formulación de reclamos, ayudará en la disminución de posibles inconvenientes. Por esta razón no se deberá impedir o desalentar la formulación de denuncias ante autoridades judiciales externas o inspectores independientes.

Toda denuncia sobre tortura o malos tratos será tramitada de inmediato, de modo que el denunciante sienta confianza. En este caso, deberá llegar directamente al Director o a un organismo externo superior.

Se deberá implementar un procedimiento similar al anterior, para recepcionar denuncias ante conductas delictivas de un agente penitenciario u otro recluso. La denuncia se tramitará ante el organismo que corresponda y se seguirá el procedimiento que este determine.

Los reclusos podrán exponer ante el organismo que corresponda todo asunto que tenga que ver con su detención, condena o puesta en libertad.

También los reclusos podrán reclamar por decisiones disciplinarias que se hayan tomado en su contra o cuando no se han seguido los procedimientos adecuados, para este caso igualmente debe quedar abierta la instancia superior.

La gran mayoría de las peticiones estará relacionada con cuestiones administrativas donde el recluso esperará que se reconozca que algo fue como debería haber sido y que se le presente una disculpa. Si este tipo de denuncia se trata honestamente, habrá menos posibilidades de que se albergue un sentimiento permanente de agravio.

Las administraciones penitenciarias tendrán que ser perceptivos a la culturas o tradiciones cuando estas denuncias sean elevadas por el líder de un grupo, clan o familia en lugar de individualmente.

Capítulo VI: Los Derechos Humanos de los Internos

La legislación internacional en relación con el reconocimiento de los derechos humanos como concepto universal ha constituido uno de los logros más importantes de las naciones en la última mitad del siglo pasado. En este sentido, tanto la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” como el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, han reconocido expresamente el derecho a proteger a la familia como entorno natural del hombre y el derecho a preservar de injerencias a nuestras vidas privadas.

La política penitenciaria debe garantizar el derecho de los internos a mantenerse en contacto con su entorno familiar.

En esta materia, el SPF ha implementado sistemas de visitas especiales con el objeto de mantener a los internos vinculados afectivamente con su entorno familiar. Dentro de este programa de visitas especiales se encuentran las destinadas al festejo de cumpleaños del interno, aniversarios de otro tipo, y otros eventos que permitan vincular al recluso con su familia. Es importante tener en cuenta, que gran parte del problema de la reincidencia se encuentra focalizado en entornos familiares problemáticos. que no permiten una adecuad contención del ciudadano que, habiendo cumplido una pena carcelaria, vuelve a su familia.

Yendo aún más allá, se debe garantizar el desarrollo humano de los internos facilitando este contacto social con su propio entorno socializador .

No es aceptable bajo ningún concepto que la restricción de este derecho sea utilizada a modo de sanción o castigo. El contacto con el entorno directo del interno, no debe considerarse un privilegio, sino un derecho humano básico.

En los casos en que el interno no tenga un entorno afectivo mínimo, debería contemplarse un servicio voluntariado, que de alguna manera permita la continuidad del contacto social del interno.

Resulta evidente, que la proximidad física del entorno familiar del interno a la unidad carcelaria, en muchos casos, determina la posibilidad de que exista o no el mencionado contacto.

Atendiendo este aspecto, la política penitenciaria debería contemplar como una de las cuestiones de peso para decidir la distribución geográfica de los detenidos y el enclave de las nuevas unidades carcelarias, una distancia posible de realizar con una frecuencia razonable para el caso de ser visitado y preservar el contacto, aunque mínimo; del entorno de desarrollo afectivo del interno.

Permisos de salida

La posibilidad de visitas a sus domicilios, debería constituir una posibilidad a considerar en los casos de internos cuyas penas, ya sea por la índole de la reclusión o por la proximidad de la fecha de liberación, así lo permitieran. Una adecuada valoración de los casos para facilitar esta modalidad de visita domiciliaria controlada, debería estar contemplada en una política penitenciaria integral.

Visitas de familiares

En la medida de las posibilidades, y de acuerdo a cada caso en particular, las visitas del entorno más próximo del interno debe hacerse en un ámbito de privacidad. La premisa básica de una buena política penitenciaria debería ser la mayor cantidad posible de visitas en el mejor marco posible y favorable al interno, en la medida que se garantice la seguridad.

En este sentido, en algunos países se ha dispuesto la modalidad de visitas familiares prolongadas. En algunos casos, los internos disponen de una vivienda privada dentro de la unidad, a ser utilizada por él y su entorno familiar directo por un período no superior a 72 horas y con un máximo de cuatro veces por año. La idea es reproducir, por un breve período de tiempo, la situación familiar del interno.

Asimismo, existen países que tienen legislada la visita conyugal. Independientemente de la modalidad adoptada en cada país para estos

encuentros, la idea es proveer al interno un tiempo acotado de intimidad con su pareja afectiva.

Debería considerarse en el caso que el interno fuese una mujer y madre, asegurar el contacto con su/s hijo/s. En estos casos especialmente, debería garantizarse la adopción de medidas que permitan un contacto mínimo que minimice el perjuicio de la ausencia de la madre en la crianza de sus hijos.

Lo mismo ocurre con los internos menores de edad en relación con el contacto con sus padres y núcleo afectivo primario.

Especialmente entre madres e hijos, no debería prohibirse el contacto físico con la detenida interponiendo barreras físicas, a menos que razones de extrema seguridad así lo impongan.

Tratamiento de las visitas

Sin perjuicio de la debida garantía de la seguridad carcelaria, el respeto a las visitas que reciben los internos es fundamental. El equilibrio entre la forma no vejatoria ni humillante de la requisa a los visitantes y la garantía de la seguridad del penal, es un objetivo esencial.

Comunicaciones no personales

Existen otras formas de comunicación de los internos con su entorno personal y privado, que no implica el contacto físico, pero que definitivamente, redundan en la mejor contención del detenido. En este sentido, y de ser posible debería contemplarse la viabilidad de las comunicaciones telefónicas y epistolares. En un modo bastante más sofisticado y tecnológico, las video conferencias e internet resultan herramientas también fundamentales al contacto del detenido con el mundo exterior. En cada una de estas formas de comunicación se deberá velar por el equilibrio entre los derechos del interno a tener contacto con el mundo exterior y la necesidad de evitar que estas herramientas para ejercer su derecho no se constituyan en un riesgo cierto a la seguridad del predio donde se hallen detenidos.

Cartas

Debiera evitarse la censura de la correspondencia de los detenidos, excepto en los casos de extrema necesidad donde verdaderamente, se sospeche que se pone en juego aspectos de la seguridad carcelaria.

En algunos países ante la recepción de sobres que contienen artículos para el interno, se abren ante su presencia.

Comunicaciones telefónicas

Algunos sistemas penitenciarios permiten que los internos realicen llamadas. El modo de financiamiento de las mismas varía según el país. En algunos países, se permiten llamadas a cargo del que la recibe, en otros les permiten la compra de tarjetas telefónicas especiales que permiten sólo la llamada a números autorizados.

La inmediatez de las comunicaciones telefónicas con la consiguiente repercusión en los aspectos de seguridad, se puede resolver grabando todas las conversaciones las que serán guardadas por un período determinado de tiempo. Son escuchadas exclusivamente las conversaciones mantenidas por internos que las autoridades evalúen de alto riesgo.

Correo Electrónico

Poco a poco, la modalidad de comunicarse vía e-mail en las unidades penitenciarias esta entrando en consideración. Suele resolver de modo económico las comunicaciones remotas.

Materiales de lectura y otros medios

Es imprescindible comprender el hecho que una persona se encuentre aislado físicamente de la sociedad, no implica que debe estarlo en los otros sentidos. La percepción de lo que ocurre en su entorno social debe ser acabada. En este sentido, el acceso a la lectura y televisión, que en estos casos es el derecho a estar informado, es ineludible en cualquier ambiente carcelario. En términos generales, no existen motivos que justifiquen la censura a los medios de comunicación.

Contacto con asesores legales y profesionales

El derecho a la defensa justa debe estar garantizado siempre.

De este modo, las visitas de los abogados defensores o simplemente asesores del interno procesado, aún sin condena judicial, y de los condenados, no debe ser restringida.

Internos extranjeros

Existen convenios internacionales que prevén esta circunstancia determinando algunos derechos particulares a ser tenidos en cuenta en estos casos. Uno de ellos, es el hecho de asegurar el contacto con sus representantes diplomáticos o con los funcionarios que tengan la representación de sus intereses, los que podrán disponer la defensa ante los tribunales del país donde se encuentre detenido, siempre que el interno lo solicite.

Dignidad humana

Las sentencias privativas de libertad no comportan en ningún caso la privación de la calidad humana de los internos, quienes deben ser respetados y no pueden ser objeto de castigos ni maltratos por los funcionarios penitenciarios.

Las personas detenidas o encarceladas conservan todos sus derechos a excepción de los que hayan perdido como consecuencia específica de su privación de libertad.

Los derechos cuyo ejercicio se pierde total o parcialmente como consecuencia de la privación de libertad, reconocidos internacionalmente son:

- El derecho de libre circulación
- El derecho de libre asociación
- El derecho de contacto con su familia, se limita y regula su ejercicio.
- El derecho a fundar una familia, es otro de los derechos que es regulado de distintos modos según el país de que se trate.

- El derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. En algunos países, los reclusos en prisión preventiva conservan su derecho de voto. En otros pueden votar todos los reclusos. En otros países se prohíbe el voto a cualquier persona que en ese momento esté detenida, y la prohibición de votar puede incluso extenderse a quienes ya hayan cumplido su sentencia y abandonado la prisión.

La conducta de los funcionarios respecto del tratamiento humano y digno de los internos, debe ser el cimiento de todas y cada una de las actividades de una prisión.

No se trata meramente de una cuestión de principios. En términos operativos, es también el modo más eficaz y efectivo de gestionar una institución penitenciaria. Además de constituir un abuso de los derechos humanos, el incumplimiento de esta obligación puede en ocasiones tener consecuencias legales para la administración de la prisión.

Qué dicen los convenios internacionales

- “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, artículo 10:
Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Las reglas mínimas

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1957 las **“Reglas Mínimas para el tratamiento de los internos” (RM)**. Si bien se reconoce la diversidad de condiciones legales, sociales, económicas y geográficas existentes en el mundo, establece que éstas son de cumplimiento universal.

La tortura y el maltrato están absolutamente prohibidos.

Los instrumentos jurídicos sobre derechos humanos manifiestan claramente que la tortura, los castigos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes no están justificados bajo ninguna

circunstancia. Se define como tortura cualquier acto que inflija intencionadamente a una persona un dolor o sufrimiento severo, sea físico o mental, aparte del dolor o sufrimiento inherentes al hecho de estar detenida o encarcelada. Incluye la prohibición de extraer confesiones bajo tortura y da base al argumento en favor de la separación entre los organismos que investigan los delitos y los que detienen a las personas acusadas.

El maltrato nunca debe considerarse normal. Sin embargo, en aquellos países en que se da prioridad a la función punitiva de la prisión, existe el peligro de que acciones que tienen la calidad de tortura o maltrato (como el uso ilegal y rutinario de la fuerza y golpes) llegue a ser considerada por los funcionarios como conducta "normal".

Las autoridades responsables de la administración de prisiones están obligadas a asegurarse de que todo el personal esté informado sobre la completa prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes y de que ninguna de las normas de funcionamiento de la prisión puedan alguna vez ser interpretadas por los funcionarios como una autorización para infligir malos tratos a un recluso.

Esto es especialmente aplicable a los reglamentos relativos a reclusos difíciles y peligrosos, y a los confinados en unidades de aislamiento.

Existen determinados momentos clave que marcan el tono del modo en que se espera que los funcionarios traten a los reclusos. Uno de ellos es cuando el recluso ingresa por primera vez en la institución penitenciaria. Es importante que los funcionarios traten a cada recluso recién admitido con dignidad y respeto.

Otro importante conjunto de normas es el que tiene que ver con el tratamiento de reclusos violentos, que infringen el reglamento penitenciario o que resultan difíciles de manejar. El tratamiento en estos casos debe ser firme y decidido, aunque al mismo tiempo se evitarán tratos crueles o inhumanos.

Los reclusos son vulnerables al abuso sexual. Estas situaciones pueden ser forzadas, resultado de coacciones o como contraprestación por la obtención de privilegios. En algunos casos el perpetrador puede ser un funcionario o, lo que ocurre más a menudo, otro recluso. En muchos casos, los funcionarios pueden tolerar los abusos sexuales perpetrados

por otros reclusos como forma de castigo o control. En varios países la violación se ha convertido en un problema grave y extendido. Además del daño físico y psicológico que causa a la víctima, incremento la propagación del VIH/SIDA y otras enfermedades. Las administraciones penitenciarias son responsables de garantizar que los reclusos, en especial las mujeres, estén protegidos contra toda amenaza de abuso sexual.

Nunca la conducta de un recluso puede utilizarse para justificar el uso de la tortura o el maltrato. En caso de ser necesario utilizar la fuerza se hará de acuerdo con los procedimientos convenidos y sólo en la medida en que sea esencial para reducir a un recluso. En los países en que esté permitido a los funcionarios equiparse con bastones y cachiporras de algún tipo se les debe instruir para que su uso solo sea el resultado de un acto de defensa personal y nunca una forma de castigo.

Debe existir un procedimiento formal y abierto mediante el cual los reclusos puedan denunciar ante una autoridad independiente, y sin ningún tipo de temor a represalias, cualquier acto de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante.

Se debe prever un sistema que permita el acceso a las prisiones de jueces u otros observadores independientes, con el objeto de garantizar que no se produzcan casos de tortura o de tratamiento cruel, inhumano o degradante

Que dicen los Convenios internacionales

- Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 5: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 1.1: "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha

cometido, infligido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas...

- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 2: Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 10: Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar.....
- Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, artículo 3:...podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.
- Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, principio 34: Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez deberá investigar la causa.

Capítulo VII: Condiciones de vida en la cárcel

Los detenidos son especialmente vulnerables la primera vez que llegan al centro de detención o encarcelamiento. Es primordial tomar todas las medidas con el objeto de protegerlos contra torturas, malos tratos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y suicidio. Para ello deben aplicarse los procedimientos de admisión que respeten la dignidad humana.

Estos derechos son aplicables a todos los reclusos, tanto si están en prisión preventiva, en espera de juicio o sentencia, o sentenciados sean adultos, menores de edad, jóvenes o mujeres.

Qué dicen los convenios internacionales

- “Convenio de Viena sobre relaciones consulares”, artículo 36: prevé la libre comunicación, visitas e información entre el funcionario consular y los nacionales del Estado que representa.
- “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, artículo 6: Los gobiernos velarán porque se mantenga a las personas privadas de libertad en prisiones legales y se mantenga la información sobre la condición de éstos.
- “Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, artículo 10: En todo lugar de detención deberá existir un registro oficial de detenidos.
- “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, regla 7: Toda persona detenida deberá estar en esa condición por orden de autoridad competente.
- “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, regla 35: Al ser ingresado toda persona deberá ser informada de su condición y de sus derechos y obligaciones.

- "Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión", principio 13: ídem anterior.
- "Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión", principio 16: Toda persona detenida al momento de su arresto o traslado, tendrá derecho de informar de esta situación a sus familiares o representantes consulares. En el caso de menores o incapaces es obligación de las autoridades la notificación.
- "Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión", principio 18: derecho del detenido a comunicarse con su abogado.
- "Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión", principio 24: Atención médica para los reclusos desde el mismo instante de su internación.
- "Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos", regla 24: ídem anterior.
- "Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos", regla 38: para los reclusos extranjeros la posibilidad de comunicarse con su representación consular o encargado de negocios.

Los internos deben ser alojados exclusivamente en lugares de detención oficialmente reconocidos y sólo bajo orden de detención previa emitida por autoridad competente. Serán incorporados al registro de la unidad y sus familiares y letrados notificados de tal situación. En el caso de extranjeros podrán comunicarse con representantes de sus gobiernos y recibir visitas de los mismos.

La obligación de atención

La justicia y equidad deben ser principios que rijan la vida de los internos.

Al ingreso se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar que ellos conozcan el reglamento del establecimiento, cuáles son sus

derechos y obligaciones. Igual medida deberá tomarse con quienes no dominen el idioma local, los analfabetos o los discapacitados. Es por ello que es necesario que quienes trabajen en el área de ingresos sean seleccionados con mucho cuidado y reciban una adecuada capacitación.

El Estado debe cumplir con su obligación de respetar la dignidad humana. Para ello es indispensable que proporcione alojamiento, condiciones higiénicas, indumentaria, camas, alimentos, bebidas y ejercicio adecuados. El encarcelamiento debe evitar el riesgo de abusos físicos o emocionales por parte de los funcionarios o de otros reclusos, el riesgo de enfermedades graves, o de muerte, debido a las condiciones físicas o a la ausencia atención adecuada.

La falta de presupuesto jamás debe ser usada por el Estado para justificar la omisión de atender decentemente a quienes están bajo su custodia. Tampoco para dejar en prisión sólo a los criminales más peligrosos.

El encarcelamiento puede suponer el alojamiento de un gran número de personas en un espacio muy reducido, con poca o nula libertad de movimiento. Esto presenta una serie de riesgos en su salud, como ser: enfermedades infecciosas, dermatológicas, neumonías, etc.

El alojamiento en el que residan los reclusos deben satisfacer ciertas normas básicas. Las normas internacionales dejan claro que los reclusos deben disponer de suficiente espacio para vivir, con acceso a suficiente aire y luz para mantenerse sanos. Uno de los problemas más graves es el hacinamiento, que puede tomar diferentes formas: celdas diseñadas para una sola persona ocupadas por varios reclusos. (doce o quince individuos en una celda de escasos ocho metros cuadrados) o de centenares de reclusos en un local de gran tamaño.

Las normas internacionales, a las cuales nuestro país ha adherido, obligan al Estado a proporcionar la indumentaria adecuada para mantener fresco o abrigado al recluso, en función de su estado de salud, y prohíbe vestirlos de manera degradante o humillante. En el caso de que se les proporcione uniformes penitenciarios éstos no deben estar diseñados de tal modo que humillen a quien lo lleva (en nuestro país, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad N°

24.660 establece la prohibición del uso de uniformes por parte de los internos penitenciarios).

Todo recluso debería tener acceso a instalaciones en las que pueda lavar con frecuencia sus ropas. Como la circulación de los reclusos dentro de la prisión suele estar severamente limitada, es importante asegurar el acceso regular a las instalaciones sanitarias para su aseo e higiene.

Cada recluso debe tener su propia cama o colchón, ropa de cama limpia y un espacio propio para dormir. En algunos países, los niveles de hacinamiento son tan graves que los reclusos deben dormir por turnos, compartiendo los espacios o camas.

Las administraciones penitenciarias deben proporcionar a todos los reclusos suficientes alimentos y bebidas para que no sufran de hambre o enfermedades derivadas de la desnutrición. Se les proporcionarán los utensilios individuales para ello y la posibilidad de lavarlos. No obsta el hecho de que el país no cuente con suficientes recursos presupuestarios. Al privar a alguien de su libertad el Estado es responsable de su integridad física y moral. En estos casos conviene estudiar todas las posibilidades de aprovechar los terrenos disponibles dentro o en las proximidades de las prisiones para cultivar alimentos y de organizar a los reclusos para que se encarguen de dicho trabajo.

Es esencial para la salud física y mental que cada día se les permita a los reclusos estar un tiempo suficiente al aire libre. El mínimo recomendado al aire libre es de una hora cada día.

Qué dicen los convenios internacionales

- “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, reglas 9-21: Las celdas deben ser ocupadas por un solo preso. Cuando sean dormitorios comunes, deben estar perfectamente acondicionados. Deben satisfacer condiciones de higiene, climatización y alumbrado. Las áreas para el trabajo deberán ser adecuadas. Las instalaciones sanitarias también.
- Se exigirá a los reclusos el aseo personal y se les proveerá de los medios necesarios para ello. Se le proveerá de una cama

individual y de ropa de cama. Recibirá alimentación de calidad y balanceada. Se le permitirá realizar ejercicios físicos al aire libre

Libertad de Culto

El derecho a la libertad de credo y a la observancia de los ritos de dicha religión es un derecho humano universal y los reglamentos penitenciarios deben incluir el derecho visita a los reclusos por parte de representantes de las diversas religiones y de practicar sus deberes religiosos.

El recluso tiene el derecho de observar los ritos de su religión. Se deberá garantizar que puedan rezar y cumplir con los demás ritos (higiene o vestimenta), reunirse en grupo para los servicios religiosos en las festividades pertinentes, o ser visitados por los representantes de su religión.

Estas disposiciones son aplicables a todas las confesiones religiosas reconocidas y no deberán estar limitadas a las religiones principales u oficiales del país. Se deben garantizar los derechos de los reclusos procedentes de grupos minoritarios

Qué dicen los convenios internacionales

- “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión....
- “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, artículo 18: ídem
- “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”: se nombrará a un representante autorizado de un culto, cuando haya un número suficiente de reclusos de una misma religión.

Capítulo VIII: Tratamiento penitenciario

Un segmento fundamental dentro del ámbito de las políticas públicas y, en particular de las relaciones con la protección social, con la plena vigencia de la justicia y con el irrestricto reconocimiento de la dignidad de las personas, se materializa en la planificación y ejecución de una Política Nacional Penitenciaria, en la que el Servicio Penitenciario Federal, es el órgano ejecutor y quien tiene a su cargo la administración de la pena.

El servicio penitenciario tiene como objetivo fundamental y básico el cumplimiento de la Ley N° 24.660 de Ejecución de la pena Privativa de Libertad y, consecuentemente, de todo lo que de ella se desprende.

Dice la Ley en su artículo 1° que la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.

El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada.

En su artículo 11, la citada ley establece que: esta Ley, con excepción de lo establecido en el artículo 7°, es de aplicación a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Las cuestiones que pudieran suscitarse serán resueltas por el juez competente.

De la lectura armónica de la Ley de Ejecución se desprende claramente la finalidad de la pena privativa de libertad para los condenados y la asimilación a ese efecto de los procesados privados de libertad. La misma ley fija el medio para arribar a tal fin: el tratamiento.

El Tratamiento sobre el interno debe estar orientado a que el condenado adquiera la capacidad de respetar la Ley.

Para ello, se coordinan un conjunto de actividades terapéutico asistenciales dirigidas a colaborar en el proceso de reinserción social del sujeto.

El Tratamiento Penitenciario deberá ser:

- Interdisciplinario

Todos los trabajadores del Centro deben intervenir en la ejecución de los programas de tratamiento. Ya no debe ser como antes, que se entendía que el único personal que hacía tratamiento penitenciario era el Técnico (psicólogos, pedagogos, sociólogos, criminólogos). Así pues, el tratamiento es cosa de todos y no sólo de unos cuantos. Quizá con ello el personal esté más motivado, y sea más participativo en el mismo.

- Individualizado

El tratamiento tiene que ser individualizado. Por lo tanto hay que identificar las carencias que han llevado al interno a delinquir. El Equipo Técnico de la Unidad Penitenciaria debe proponer el programa de cada interno, el cual, una vez aprobado por la Junta de Tratamiento, tiene que ejecutarse por el citado Equipo

- Programado

La prisión debe tener un clima social adecuado que permita llevar a cabo el tratamiento. En este medio no debe haber tensión ni stress, o sus niveles deben ser bajos puesto que el ambiente estresante reduce la autoestima y la capacidad futura de enfrentarnos con éxito a situaciones problemáticas. La tensión en el Centro, afecta tanto a los internos como a los funcionarios y dificulta la ejecución del tratamiento. Para ello es conveniente que tanto unos como otros sean "elegidos" dependiendo del tipo de tratamiento que se deba impartir. Como hemos dicho, el tratamiento es individualizado y no debe ser el mismo para un recluso multirreincidente y peligroso, que para uno primario y de baja peligrosidad. Los trabajadores deben estar formados y entrenados para colaborar en la ejecución del tratamiento correspondiente

- Contener aspectos obligatorios como:

- i. Convivencia

- ii. Disciplina
- iii. Trabajo
- Contener aspectos voluntarios como:
 - iv. Educación
 - v. Salud Psicofísica
 - vi. Espiritualidad
 - vii. Relaciones familiares y sociales
- Ser abierto a la comunidad

La prisión debe estar abierta a la comunidad, es decir, la comunidad puede entrar al Centro Penitenciario y colaborar en la realización de los programas de tratamiento

La historia de la Penología y del Penitenciarismo enseña que si bien existe un importante acuerdo respecto a que la pena privativa de libertad debe tener un fin útil y no limitarse a ser un mero castigo, el medio para brindar oportunidades de mejora y promoción personal, es decir, el tratamiento, no ha logrado significativos avances en todo el proceso evolutivo de la privación de libertad como pena. Por ende, el desafío consiste en elaborar una nueva propuesta metodológica de tratamiento penitenciario que responda a un criterio científico y que se centre en poner al alcance del condenado e incluso del procesado actividades que le posibiliten superar esquemas personales, carencias o desviaciones conductuales de las cuales el delito es síntoma y medida.

En el plano de lo concreto, la formulación de una Metodología de Tratamiento implicaría la elaboración y reelaboración de distintos componentes del proceso que se desarrolla durante la evolución en la progresividad del régimen penitenciario.

Por todo ello el tratamiento no debe finalizar en la prisión, sino que debe continuar en la comunidad después de la excarcelación.

Hay tres factores importantes que pueden evitar la reincidencia en el delito:

- La existencia de la familia u otro grupo social que apoye al ex-recluso. Si el sujeto tiene familia y una buena inserción social, se dificulta el volver a delinquir.
- Si tiene trabajo, el sujeto se inserta laboralmente y quizá no se vea en la necesidad de delinquir. También hemos de tener en cuenta que muchas veces, aunque se tiene empleo se vuelve a delinquir, pero no cabe duda que el riesgo disminuye si se tienen cubiertas las necesidades económicas básicas.
- Cuando el sujeto va madurando, envejeciendo, también disminuyen las probabilidades de delinquir; es normal, cuanto mayor se es, se asumen menos riesgos.

El tratamiento penitenciario puede influir en gran medida en los dos primeros factores.

Mientras que haya tratamiento hay esperanza de reeducación y reinserción social, objetivos que nos encomienda nuestra Constitución y sin los cuales, sí que no tiene sentido la pena privativa de libertad y mucho menos, la prisión en el mundo actual.

El trabajo como elemento resocializador

Una de las variables asociadas a la evolución de la actividad criminal es la referida a las características del medio urbano, los valores y normas compartidas por la comunidad. Es por ello que se considera fundamental el impacto social sobre las conductas de los individuos, fundamentalmente cuando dichas conductas se vinculan con sujetos que integran alguno de los grupos vulnerables o de riesgo. En este sentido, comunidades que ven destruidas porciones significativas de su capital social son comunidades donde proliferan conductas antisociales, predatorias, violentas y delictivas.

El tejido social opera como una doble forma de contención del individuo. Por un lado, lo alberga y lo hace sentir protegido y por otro, le pauta las conductas al impulsarlo a realizar ciertas prácticas y omitir

otras. En otros términos, lo socializa inculcando determinadas normas, valores y percepciones comunes.

Cuando estos lazos sociales se debilitan y la fragmentación social emerge, las personas se desinteresan por sus semejantes y las normas pierden su capacidad reguladora en la práctica. Sin la contención y las limitaciones que impone lo social, el individuo carece de "control social informal", de modo que los incentivos que reciba para adoptar comportamientos antisociales no se toparán con ninguna barrera de contención. En este contexto aumentan las probabilidades de adoptar actitudes que atenten contra la vida humana, tanto la propia como la de otros.

De la investigación realizada por el Instituto de Criminología del SPF, en el año 2003, sobre el 37% de la población penal condenada, se desprende, a modo de síntesis, los datos que a continuación se exponen específicamente vinculados a uno de los aspectos analizados, como es la variable "trabajo", previo a la detención del interno, actividad esencial de la persona.

Este punto se encuentra íntimamente ligado a toda la estructura de personalidad y asociado al nivel socio-económico y al nivel de instrucción y encontramos que el primer punto a tener en cuenta es el alto porcentaje de internos que manifiestan haber tenido algún tipo de inserción laboral, el 94 por ciento. Este porcentaje no refleja la estabilidad ni la calificación de la actividad. Además, se registra la incorporación laboral a una temprana edad y un abandono de la misma poco tiempo después, resultando en general las actividades que realizan desjerarquizadas e inestables.

Lo que hace de esta cuestión uno de los problemas más graves es que el delito comienza a ser percibido, muy a menudo, por los más jóvenes como algo normal. Quienes forman parte de una clase social media baja o baja se ven comúnmente obligados a salir a trabajar desde muy temprana edad, lo cual hace surgir dos problemas centrales: la dificultad para mantenerse en la escuela y lograr así formarse e integrarse a la sociedad y, por otra parte, el surgimiento de una conceptualización errónea del trabajo. El trabajo pasa a ser una estrategia de supervivencia, lo que provee el sustento diario, y

entonces salir "a pedir" pasa a ser un trabajo, el robo, es denominado comúnmente como "un laburo", en tanto parece estar asociado a proveer ese sustento diario, no sólo para él sino para toda su familia, sustento que no se logra a través de recursos propios de los padres.

Para muchos el delito pasa a ser una modalidad de vida, que les permite "cubrir" sus necesidades, incorporándolo como aquella actividad de la cual dependen y por la que se transforman en proveedores de su entorno familiar. Las consecuencias del mismo pasan a ser entonces aceptadas como propias de las "reglas del juego", incluyendo las reiteradas detenciones por las cuales pasan en su vida.

Centrándonos en el análisis de lo que aparece como primera motivación manifiesta de la incursión en una actividad delictiva, que es la "necesidad económica", encontramos que este argumento proviene de las diferentes clases sociales, pero también se observa que es significativamente más alto el porcentaje (74%) de quienes pertenecen a una clase social baja y media baja, que quienes forman parte de sectores de clase media o media alta (15%). En los extremos, se encuentran la clase alta y la extrema pobreza (1%). Esto nos permite inferir que si bien el delito no es exclusivo de ciertas clases sociales, si es relevante el hecho que en nuestro país quienes llegan a una condena y forman parte de la población penal son en su mayoría aquellos que pertenecen a los sectores sociales más pobres y con un nivel de instrucción más bajo. El estudio estadístico registra los siguientes porcentajes: el 39 % alcanza el nivel primario completo, siendo el nivel intelectual en un 47%, inferior al término medio. Quienes han trabajado sobre este punto destacan que la conducta delictiva en jóvenes guarda una fuerte relación con el nivel de instrucción, lo que resalta la importancia de la escuela como barrera de ingreso al delito. Resulta interesante, si analizamos la variable "móvil del delito", encontramos que tanto en hombres como en mujeres se encuentra como principal motivación la necesidad económica (26%), en segundo lugar "se ignora" (20%), y en tercer lugar "se declara inocente" (19%).

Estos datos nos permiten considerar que, si bien la necesidad económica es la principal causa manifiesta que llevaría al delito a un sujeto, el segundo argumento de “se ignora” las motivaciones del delito y el tercero, “se declara inocente”, dan cuenta por un lado de una cantidad significativa de personas que si bien admiten haber sido autores del delito que se les imputa, no pueden explicar las motivaciones que lo habrían llevado al acto delictivo. Esto implica que hasta el momento de haber sido condenado aún no se han preguntado por las mismas. Y en tercer lugar están aquellos que directamente no asumen la comisión del hecho y se declaran inocentes, utilizando para ello diferentes argumentos cuyo denominador común es el proyectar en otros la responsabilidad del mismo, pasando a ser la condena algo accidental en sus vidas.

Trabajar sobre el reconocimiento de estas conductas es un eje central por donde debe pasar el tratamiento en una institución penitenciaria, resultando éste el punto de partida para adentrarnos entonces en las motivaciones manifiestas y ofreciendo a los internos todo un conjunto de actividades terapéutico-asistenciales dirigidas a colaborar en el proceso de su reinserción social.

Experiencia internacional

Italia

En su guía para detenidos, en el acápite III “Prisión” punto 28 “Trabajo en el centro penitenciario” establece que en la mayoría de los centros penitenciarios los detenidos pueden trabajar y reciben un sueldo. En algunos centros es por sistema de turnos ya que no hay suficientes trabajo para los reclusos.

Gran Bretaña

En la Guía para detenidos, en el punto 30, se señala que la prisión debe ofrecer un trabajo al condenado.

Alemania

Se vende ropa diseñada por los presos de la cárcel de Tegel. La venta de la marca "Preso" tiene éxito no sólo en el país sino también en el extranjero. Se resalta que lo más importante de esta tarea es el recupero de la dignidad del preso y un modo de preparación para su reintegro a la sociedad. Hay 90 reclusos que, por el momento, trabajan en la confección de la ropa y en los envíos postales, cobrando una media de ocho euros por jornada laboral. Los ingresos se reparten entre la agencia de publicidad (fue la que tuvo la idea y confeccionó la página en Internet); la penitenciaria, que paga a los presos y dedica parte de los fondos para ampliar la biblioteca y el Estado de Berlín. El perfil del consumidor de este producto comprende distintas edades. Hay otros productos en proyectos para la venta como así también la apertura de un local en un barrio de clase alta.

España

Hay 100 empresas que contratan presos. De los 74 centros penitenciarios, 54 ofrecen mano de obra y talleres. Algunos de ellos están equipados para la producción orientada a artes gráficas o la agricultura. El producido es puesto a la venta. Otros centros cuentan con infraestructuras y equipamientos que ponen disposición de empresas. La Administración Central responde del cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. Los reclusos aportan su mano de obra cualificada. Durante su estancia en prisión reciben cursos de formación en los distintos procesos de producción con una carga horaria de 500 horas. El desarrollo del trabajo les permitirá, cuando accedan a la libertad, poder incorporarse al mercado laboral y posiblemente a través de las propias empresas que los han contratado. Los centros donde trabajan están homologados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y reconocidos por el Fondo Social Europeo. Más de 100 empresas y 500 clientes particulares recurren a esta

opción. Su domicilio suele encontrarse en la misma población o en otra próxima al centro penitenciario. La empresa concesionaria que contrata la nave-taller aporta un monitor propio que ejerce el control de calidad. En caso de reclamo responde la Administración. Se contrata a los internos sólo por cada obra o servicio. Una empresa puede disponer de 50 operarios para un trabajo concreto y prescindir de la mitad de otro proyecto para reducir gastos de personal. El coste para la empresa equivale, por cada empleado a, al Salario Mínimo Interprofesional, que se ajustará según las horas que sean trabajadas.

Hay talleres que cuentan con una infraestructura preparada para actividades como la textil; artes gráficas; electrónica; madera o cerámica industrial. Hay otras naves que están equipadas con maquinaria para manipular piezas o elaborar lo que la empresa concesionaria requiera. En los talleres se produce también para autoabastecerse a la propia prisión o a otros centros (artículos textiles; agro-ganaderos; artes gráficas o mobiliario). Hay economatos que se explotan de manera profesional. Hay una cocina, en fase de experimentación, con capacidad para 1.600 comensales.

La Dirección de Trabajo Productivo se preocupa por la formación y organización de trabajo productivo como así también de su gestión y explotación comercial. El problema que existe es que no todos los internos pueden participar de los talleres productivos. Si en un centro se va a iniciar una nueva actividad, previamente se imparten cursos para que la empresa concesionaria encuentre una mano de obra apta. Para los internos existe una interesante ventaja: si se acoge a sentencias dictadas antes del nuevo Código Penal, obtiene una redención de un día por cada uno o dos de trabajo, además de una remuneración y del aprendizaje. Hay talleres productivos y ocupacionales en los que se fomenta el

desarrollo personal. En éstos, hay un importante stock de las piezas de cerámica y otras muestras de expresión artística. Por el procedimiento de concurso y subasta, se pondrá en marcha su comercialización, siendo lo recaudado para los autores. Se puntualizan las ventajas que aparejan a las empresas que contratan presos: flexibilidad, formación, garantía, esparcimiento, equipamiento, seguridad, versatilidad, precios competitivos. En la ciudad de Barcelona, el Centre d'Iniciatives per a la Reincerció (CIRE), gestiona el trabajo que se realiza en los talleres de los ocho centros penitenciarios catalanes siendo sus actividades la fabricación de cajas de frutas, las artes gráficas, la carpintería; la confección y el montaje; los manipulados; la panadería y la cerrajería y la confección de triángulos de señalización. El 44% trabaja por una media de 300 por hora (aunque cobran por unidad producida y no el tiempo trabajado); cobrando el 75% del Salario Mínimo Interprofesional en jornadas parciales de cuatro horas, sin aumentos sustanciales.

Estados Unidos

Existe lo que se llama "Complejo Industria de Prisiones", compuesto por corporaciones privadas que montan sus operaciones dentro de las cárceles, contratando a los internos para trabajar en las industrias con una muy baja retribución económica, con características de explotación. La población carcelaria ha aumentado considerablemente en los últimos años, siendo uno de los factores la conveniencia por el aumento en las ganancias de las empresas y de las mismas cárceles. En algunos estados se mantiene el concepto de trabajo forzado.

Venezuela

Una pequeña minoría de la población carcelaria tiene acceso a actividades laborales o educativas. Hay presos que trabajan por su cuenta utilizando las materias primas y herramientas que les suministran sus familiares. La mayoría de los presos están desocupados. La Ley de Redención de la Pena por el Trabajo y por el

Estudio permite a los presos reducir sus sentencias en un día por cada dos días de trabajo o estudio. El sistema se torna injusto para el goce de los beneficios por los motivos anteriormente explicados. Las leyes exigen que los presos trabajen. Las prisiones venezolanas ofrecen pocas oportunidades de empleo. Una agencia independiente del gobierno, el instituto Autónomo de caja de Trabajo Penitenciario, tiene la tarea de aumentar la utilización del trabajo penitenciario. Sin embargo, en las prisiones hay poca constancia de la existencia de esta agencia.

Menos del 10% de los internos trabajaron en 1995. En 1998 el Ministerio de Justicia informó que el 24 por ciento de la población carcelaria trabajaba para el sector formal y que más de 3.000 presos trabajaban por su cuenta. Ciertas prisiones, carecen de oportunidades laborales organizadas. Para ganar algo de dinero los presos recurren a taller objetos decorativos y religiosos en acabados. Hay también zapateros; carpinteros.

La jornada laboral es de media jornada. En algunas prisiones se permite a algunos internos seleccionados trabajar fuera del centro durante el día (destacamento de trabajo), o salir de la prisión de vez en cuando para vender sus productos.

El trabajo penitenciario en Argentina

El "Programa Nacional de Trabajo en Cárceles y Readaptación Social" fue creado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco del Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004 – 2007, con el fin de coordinar el desempeño labor terapéutico de los internos carcelarios, a través de la totalidad de los Complejos Penitenciarios Federales de la Argentina.

Objetivos

Generar modalidades que permitan extender el derecho de trabajar y adquirir formación profesional a la mayor cantidad de internos, principalmente a través de:

- La comercialización de los productos de elaboración propia, producidos en los complejos penitenciarios.
- La organización de un Concurso de proyectos con los sectores productivos para la fabricación y venta masiva de bienes y servicios elaborados por internos penitenciarios.
- La fabricación de insumos y provisiones para el sector público.

Desarrollar un plan de capacitación de los internos, principalmente orientado a:

- La alfabetización total de los condenados alojados en las unidades del Servicio Penitenciario Federal.
- Potenciar las posibilidades de finalizar los estudios primarios y secundarios.
- La elaboración de un plan de capacitación en oficios específicos para su inserción profesional posterior.
- La implementación del programa "Para un después", a través del que se desarrollará un plan de capacitación intensivo, centrado en el desarrollo de oficios, para internos que se encuentran a un año de obtener la libertad.

El problema sanitario

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12), reconoce el derecho fundamental de los reclusos a gozar de una buena salud, tanto física como mental, así como a una atención médica cuyo nivel sea, como mínimo, el mismo que goza la población en general.

Cuando el Estado priva a un individuo de su libertad, asume la responsabilidad de cuidar de su salud y de brindarle el tratamiento individual que pueda ser necesario.

Los reclusos deben abandonar la prisión en el mismo estado al que tenían a su ingreso.

Un alto porcentaje de la población penitenciaria del mundo está infectado de enfermedades contagiosas, como la tuberculosis, la hepatitis y el HIV/SIDA. Son los Estados los responsables de asegurarse de que toda persona que entre en una prisión, no solo los reclusos, sino también los funcionarios y visitantes, no se exponga al riesgo de contagio. Se deberá tener en cuenta que, como resultado del contacto entre la prisión y el exterior, a través de funcionarios y visitantes, o de la puesta en libertad de los reclusos, existe la posibilidad de exponer al contagio a toda la comunidad.

Todo tratamiento médico o sanitario que preste la administración penitenciaria deberá tener como mínimo una calidad semejante a la existente fuera de los muros de la prisión. Se deberá proporcionar como mínimo: examen médico inicial en el momento del ingreso a la prisión, en todo momento y sin dilación en casos de urgencia; consultas médicas periódicas; tratamiento de urgencia; instalaciones debidamente equipadas para las consultas y tratamiento de los reclusos; suficiente cantidad de medicamentos adecuados, dispensados por farmacéuticos cualificados; instalaciones para fisioterapia y rehabilitación; cualquier dieta especial que se considere médicamente necesaria.

En todos los aspectos de la atención médica, las autoridades penitenciarias deben aspirar a establecer y mantener estrechos vínculos con los prestadores de servicios sanitarios de fuera de la prisión. Esto no sólo permitirá la continuidad de los tratamientos, sino que además los reclusos y los funcionarios podrán aprovechar las ventajas de los nuevos métodos, tanto en lo relativo a los niveles profesionales como en capacitación.

La atención sanitaria penitenciaria a toda persona detenida o presa debe ser gratuita. Aún en los casos de tratamientos costosos, deben procurarse los mismos.

El examen médico inicial en el ingreso a prisión es importante atento que permite al personal médico identificar dolencias preexistentes y disponer el tratamiento adecuado.

Los Estados deberán adoptar las medidas adecuadas para garantizar que los reclusos enfermos o preocupados por su estado de salud

tengan acceso a un funcionario médico debidamente cualificado y que se respete su dignidad.

El Estado tiene la obligación absoluta de cuidar de aquellas personas a quienes ha privado de su libertad. Las condiciones de detención (alojamiento, alimentos y medidas higiénicas y sanitarias) tendrán un fuerte impacto sobre la salud de éstos.

El hacinamiento, y la aguda escasez de recursos son obstáculo para ello.

Las enfermedades contagiosas se han convertido en un gravísimo problema para muchos países, la tuberculosis y el HIV/SIDA se propagan con rapidez.

En estos casos se debe formular un programa de educación del personal y de los reclusos sobre las formas de protección de dichas enfermedades.

Asimismo, se deberá prestar atención al bienestar mental de los reclusos y a aquellos quienes se les diagnostique una enfermedad mental no deben ser mantenidos en prisión, sino trasladados a un centro psiquiátrico debidamente equipado.

Convenios Internacionales

- “Principios básicos para el tratamiento de los reclusos”, principio 4: Obligación de custodia y protección de los reclusos por parte de los funcionarios de las cárceles.
- “Principios básicos para el tratamiento de los reclusos”, principio 9: Acceso por parte de los reclusos a los servicios de salud de los que disponga el país sin discriminación.
- “Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión”, principio 24: Examen médico apropiado al ingreso al penal y en cualquier momento.
- “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, regla 22: Obligación en los servicios penitenciarios de contar con un servicio médico apropiado incluido un servicio psiquiátrico. Derecho de los reclusos a recibir atención odontológica. Traslado de los reclusos que requieran atención especializada

a servicios penitenciarios especializados o a hospitales civiles.

- “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, regla 25: obligación del médico a visitar diariamente a los enfermos y a acudir ante cualquier requisitoria.
- “Reglas mínimas para el tratamiento de los internos”, regla 62: Obligación de los médicos de descubrir y tratar las enfermedades.
- “Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, principio 1: Obligación del personal médico de tratar a los detenidos con el mismo cuidado y atención que a los que no lo están.

Anexo I

Principales instrumentos normativos nacionales e internacionales relativos a la problemática de la administración penitenciaria.

- Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad
- Ley N° 20.416 Orgánica del Servicio Penitenciario Federal
- Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos
- Principios Básicos para el tratamiento de reclusos
- Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
- Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad
- Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
- Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas persas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a pena de muerte.
- Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil.
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las penas no privativas de libertad.

Anexo II

El Sistema Penitenciario Federal en Números



SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL

Evolución clasificación de hechos delictuosos (por tipo de delito)

Año	Delitos contra las personas	Delitos contra la Propiedad	Otros Delitos	Total Hechos Delictuosos
1990	14,08%	72,19%	13,73%	100,00%
1991	17,16%	66,98%	15,86%	100,00%
1992	18,09%	65,54%	16,37%	100,00%
1993	19,31%	64,14%	16,56%	100,00%
1994	20,19%	63,21%	16,61%	100,00%
1995	19,02%	65,08%	15,90%	100,00%
1996	19,52%	65,11%	15,37%	100,00%
1997	19,22%	66,06%	14,72%	100,00%
1998	18,26%	66,39%	15,35%	100,00%
1999	17,48%	68,13%	14,38%	100,00%
2000	17,95%	66,71%	15,34%	100,00%
2001	17,88%	66,42%	15,70%	100,00%
2002	15,74%	69,89%	14,37%	100,00%
2003	17,27%	67,42%	15,31%	100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL

Años	Total Delito	Tasa Crecimiento Delito	Tasa De Encarcelamiento	Tasa Crecimiento Encarcelamiento	Población	Tasa Crecimiento Pobacional
1997	816.340		83,2		35.671.894	
1998	922.948	13%	84,2	1%	35.925.521	0,71%
1999	1.062.241	15%	88,1	5%	36.180.952	0,71%
2000	1.129.900	6%	104,9	19%	36.438.198	0,71%
2001	1.178.530	4%	111,7	6%	36.697.274	0,71%
2002	1.340.529	14%	127,1	14%	36.958.191	0,71%
2003	1.270.725	-5%	142,2	12%	37.220.964	0,71%
2004	1.246.240	-2%	163,9	15%	37.485.605	0,71%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL

Déficit de Plazas en el Servicio Penitenciario Federal

Año	Proyección Población SPF (en N° de internos)	Población SPF en Dependencias Ajenas (en N° de internos)	Incremento anual de la Población Penitenciaria (en N° de internos)	Evolución de la Capacidad Actual (en plazas)	Ampliaciones y Construcciones (en plazas)	Capacidad Total Proyectada (en plazas)	Evolución del Déficit de Plazas
2005	10.350	1.190		9.064	1.812	10.876	664
2006	10.868	2.438	518	10.876		10.876	2.430
2007	11.411	1.315	543	10.876	944	11.820	906
2008	11.981	709	571	11.820	1.584	13.404	- 713
2009	12.580	383	599	13.404		13.404	- 441
2010	13.210	206	629	13.404		13.404	12
2011	13.870	111	660	13.404	660	14.064	- 83
2012	14.563	60	693	14.064	693	14.758	- 134

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL

Distribución de delitos contra las Personas (2003)

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS	Valores Abs.	Tasa c/100 mil H.
Homicidios Dolosos	2.876	7,93
Homicidios Dolosos en grado de tentativa	863	2,38
Homicidios culposos en accidentes de tránsito	3.124	8,62
Homicidios culposos por otros hechos	664	1,83
Lesiones dolosas	131.360	362,27
Lesiones culposas en accidentes de tránsito	56.669	156,28
Lesiones culposas por otros hechos	7.353	20,28
Otros Delitos contra las personas	16.508	45,53
TOTAL DELITOS CONTRA LAS PERSONAS	219.417	605,12

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL

AÑO	PROCESADO	CONDENADO	OTROS	TOTAL
1972	3.429	2.418	0	5.847
1973	2.155	1.356	229	3.740
1974	2.426	1.450	291	4.167
1975	2.385	1.580	606	4.571
1976	2.737	1.652	1.544	5.933
1977		5.223	1.460	6.683
1978		5.378	1.323	6.701
1979	3.194	2.585	1.266	7.045
1980	2.396	2.571	844	5.811
1981	2.049	2.679	1.037	5.765
1982	2.190	2.578	516	5.284
1983	1.983	2.763	110	4.856
1984	1.212	1.050	93	2.355
1985	1.626	966	70	2.662
1986	1.699	1.105	34	2.838
1987	1.737	1.386	62	3.185
1988	2.217	1.556	57	3.830



AÑO	PROCESADO	CONDENADO	OTROS	TOTAL
1989	2.467	1.596	45	4.108
1990	2.763	1.710	0	4.473
1991	2.919	1.976	70	4.965
1992	2.858	2.146	63	5.067
1993	2.957	2.305	77	5.339
1994	3.032	2.386	49	5.467
1995	3.376	2.814	53	6.243
1996	3.364	2.681	67	6.112
1997	3.385	2.697	95	6.177
1998	3.473	2.827	85	6.385
1999	3.691	2.987	89	6.767
2000	3.906	3.103	137	7.146
2001	4.537	3.175	160	7.872
2002	4.700	3.929	166	8.795
2003	5.202	3.950	94	9.246
2004	4.979	4.661	98	9.738
2005	5.590	4.367	95	10.052

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL

Tasas de Encarcelamiento Provincial (2004) (Principales distritos)

PROVINCIA	POBLACIÓN PENITENCIARIA	POBLACIÓN INDEC	TASA DE ENCARCELAMIENTO
MENDOZA	2.543,00	1.586.057,54	160,33
CÓRDOBA	5.300,00	3.079.238,92	172,12
SANTA FÉ	2.567,00	3.012.870,84	85,20
BUENOS AIRES	30.414,00	13.883.281,53	219,07

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL

Tasa de Encarcelamiento Provincial (2004)

Provincia	Población Penitenciaria	Población INDEC (2004)	Población INDEC	Tasa de Encarcelamiento c/100 mil habitantes
S.P.F.	9.738	36.703.099	36.703.099	26,5
Buenos Aires	30.414	13.883.282	13.827.203	219,1
Catamarca	252	335.925	334.568	75,0
Córdoba	5.300	3.079.239	3.066.801	172,1
Corrientes	312	934.767	930.991	33,4
Chaco	476	988.439	984.446	48,2
Chubut	147	414.913	413.237	35,4
Entre Ríos	838	1.162.844	1.158.147	72,1
Formosa	260	488.532	486.559	53,2

Jujuy	387	614.370	611.888	63,0
La Pampa	66	300.508	299.294	22,0
La Rioja	179	291.159	289.983	61,5
Mendoza	2.543	1.586.058	1.579.651	160,3
Misiones	775	969.438	965.522	79,9
Neuquén *	945	476.078	474.155	198,5
Río Negro	516	555.064	552.822	93,0
Salta	1.733	1.083.427	1.079.051	160,0
San Juan	672	622.538	620.023	107,9
San Luis	389	369.425	367.933	105,3
Santa Cruz	262	197.757	196.958	132,5
Santa Fe	2.567	3.012.871	3.000.701	85,2
Sgo. del Estero	228	807.720	804.457	28,2
Tierra del Fuego	100	101.489	101.079	98,5
Tucumán	822	1.343.952	1.338.523	61,2

Relevamiento basado en datos proporcionados por el SPF y los servicios penitenciarios o policías provinciales.

* La provincia de Neuquén ha tenido errores de interpretación del Censo del año 2003 que pudieron influir en un mayor número de casos informado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos